

Retórica y realidad

La retórica, entendida como la utilización del lenguaje con el propósito de persuadir, es un elemento fundamental de la política. Sin embargo cuando el discurso es un puro formalismo destinado a ocultar el verdadero contenido de las acciones, se corre el riesgo de que la falta de correspondencia entre las palabras y los hechos quede al desnudo en cualquier momento. Ello es lo que ha ocurrido, con diáfana claridad, en el curso de los últimos días en la política latinoamericana.

Para nadie es desconocido, por ejemplo, que los militares argentinos justificaron siempre la represión sistemática como una necesidad nacional, puesto que su utilización permitiría vencer a los enemigos de la libertad, de la paz social, de la familia y de la propiedad privada. Ese discurso tan pacientemente elaborado ha sufrido, recientemente, un golpe de muerte que ha hecho enmudecer significativamente a los profesionales de la ideología oficial. El paro pedido por la Convocatoria Nacional de Empresarios y que tuvo su expresión más combativa en la importante provincia de Mendoza y las "jornadas de tristeza", con las que los industriales y comerciantes argentinos que producen para el disminuido mercado nacional han demostrado su abierta oposición a la política económica del Gobierno, han sido combatidas por este con detenciones y restricciones a la libertad de expresión de los dirigentes empresariales. Se trata de la utilización de la represión —aun cuando ésta no reviste, hasta el momento, la magnitud de la utilizada en contra de la izquierda— como un arma para combatir precisamente a quienes encarnan los valores que la Junta militar decía defender: la propiedad privada, la libertad de comercio, la economía nacional y la llamada paz social. En realidad, lo que ha hecho crisis es un modelo económico, diseñado fundamentalmente en función de las necesidades del sistema capitalista mundial, dominado por las potencias industrializadas, en cuyo contexto es necesario adoptar cualquier medida que ayude a la articulación de las economías nacionales subdesarrolladas a este modelo transnacional. Si para ello hay que destruir la industria nacional y eliminar las fracciones de la burguesía que producen para el mercado interno se hace, aun cuando para ello sea necesario abjurar del discurso de ayer.

La lucha en contra del terrorismo internacional sería, se aseguró, el "leit motiv" de la política exterior del gobierno de Ronald Reagan. Ello legitimaría la intervención norteamericana donde quiera que ese terrorismo apareciera, reservándose la Casa Blanca la facultad de definir qué se entendía por terrorismo y quiénes eran terroristas. Sin embargo, era obvio que aun en esa original versión del terrorismo quedaban incluidos los asesinatos políticos.

Poco después de formulada dicha política, fue sometida a la prueba de los hechos, y en ella quedó de manifiesto la absoluta falta de correspondencia entre la retórica antiterrorista y la fría realidad. La suspensión de las poco significativas sanciones económicas, que el gobierno de Carter había impuesto a la Junta militar chilena, por su negativa a conceder la extradición de los militares implicados en el asesinato en Washington de Orlando Letelier y el reciente desistimiento del Departamento de Justicia norteamericano, que retrotrae el proceso a fojas cero, indican claramente que el Gobierno de Estados Unidos no tiene interés alguno en que los autores materiales e intelectuales de uno de los asesinatos políticos más estremece-

La semana política

(CONTINUA DE LA PAGINA CINCO)

dores de los últimos años, perpetrado en la propia capital norteamericana con participación de oficiales de un gobierno extranjero, reciban justo castigo. La verdadera esencia de la política antiterrorista queda así al desnudo: lo que se pretende realmente es justificar la intervención norteamericana en aquellos casos en los que el pueblo se ve obligado a recurrir a la lucha armada, dejando impunes los reales actos terroristas como el asesinato de Letelier. Ello no ha pasado inadvertido en los propios Estados Unidos, y un editorial del "New York Times", del 3 de marzo, lo indica con claridad, al señalar que "los actos terroristas, si son cometidos por regímenes derechistas que comparten el rabioso anticomunismo del gobierno norteamericano, serán permitidos".

La última muestra de discordancia flagrante entre discurso y práctica que queremos señalar se refiere a la negativa del Gobierno de Estados Unidos para participar en la iniciativa de mediación que le fue propuesta por una delegación de la Internacional Socialista, en cumplimiento de los acuerdos recientes de dicha organización. El gobierno de Washington no desea una solución pacífica de la crisis salvadoreña, sino que pretende el aniquilamiento de las fuerzas populares, y si no le es posible intervenir porque no está seguro de ganar, como lo afirmara recientemente Reagan, está decidido a incrementar la ayuda militar, para que la guerra civil se generalice y se masifique, logrando entonces su propósito estratégico: la derrota popular en El Salvador. Retórica y realidad han quedado en este caso, como en los anteriormente señalados, al desnudo.